

Peña Ríos, María Lola
Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A
Tutela- Despido Injustificado
Rol N° 329-2023 (RIT T-197-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de la Serena).

La Serena, veintitrés de enero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Que, por decisión de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictada por don Diego Francisco Rubi Araya, Juez Letrado Destinado del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, en los autos RIT T-197-2022 y RUC 22-4-0433717-7, caratulados "Peña Ríos, María Lola con Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A", procedimiento de aplicación general laboral, por tutela laboral y otros, acogió, parcialmente, la demanda de folio 1, y estimando que se vulneraron los derechos fundamentales la de honra, la dignidad y la garantía de protección de salud psicológica de la actora se condenó a la demandada, Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A, al pago de las siguientes sumas de dinero:

1° Tope de 11 remuneraciones sobre la base de \$6.447.882, lo que equivale a una indemnización de \$70.926.702 conforme a la indemnización tarifada del artículo 489 del Código del Trabajo.

2° Devolución descuento de la suma de \$1.500.000 de finiquito que le deberá ser reintegrado a la denunciante.

3° Indemnización por cuatro años de servicios equivalente a \$25.791.532 como otras medidas reparatorias del artículo 495 del Código del Trabajo.

4° indemnización por aviso previo equivalente a \$6.447.882 como otras medidas reparatorias del artículo 495 del Código del Trabajo.

5° Indemnización por daño moral por la suma de \$10.000.000 (diez millones de pesos) como otras medidas reparatorias del artículo 495 del Código del Trabajo.

Se dispuso finalmente que cada parte pagará sus costas.

Que, en contra de la decisión contenida en el fallo referido, la parte demandada, Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A, representada por su apoderado y



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XGLVXLLJXEK

abogado, Andrés Manuel Labbé Cortes, se alzó ante esta Corte, interponiendo recurso de nulidad, haciendo valer, como causal principal la prevista en el artículo 477, primera hipótesis, del Código del Trabajo, esto es, "cuando en la tramitación del procedimiento se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales", solicitando acoger el recurso de nulidad por la infracción denunciada y se anule la audiencia de juicio y el fallo recurrido, y se ordene retrotraer el proceso hasta el estado de desarrollar una nueva audiencia de juicio por un juez no inhabilitado. De forma subsidiaria invoca dos causales de nulidad, la primera causal, la prevista en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, solicitando a esta Corte se invalide la sentencia recurrida, dictándose la correspondiente sentencia de reemplazo que rechace la demanda en todas sus partes, con costas y como segunda causal, en subsidio de las dos anteriores, la prevista en el artículo 477, segunda hipótesis, del Código del Trabajo.

Que, el recurso fue declarado admisible, se procedió a su vista en la audiencia del cinco de enero de dos mil veinticuatro, oportunidad en que se escuchó los alegatos de ambas partes, abogado don Andrés Labbé, quien se anunció y alego, vía zoom, 25 minutos revocando, y vía zoom la abogada Melanie Freres, 15 minutos, confirmando, antecedentes que se registran en el sistema de audio.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, como ya se indicó, la recurrente invoca, primeramente, como causal principal de su recurso anulatorio, la prevista en el artículo 477, primera hipótesis, del Código laboral, esto es, *"cuando en la tramitación del procedimiento se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales"*.

Que, la referida causal la fundamenta la recurrente en la trasgresión o infracción a la garantía al debido proceso, consagrado en el artículo 19 N°3 inciso 6° de la Carta Magna, en cuanto dispone que: *"Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado"*.



Que, dicha infracción al debido proceso se habría materializado y tenido su inicio en la audiencia de juicio del 4 de enero de 2023, en que al momento de incorporar la prueba documental la demandante, específicamente, la carta de despido, que en su parte pertinente se indicaba: *"El soborno en cualquiera de sus formas es inaceptable. Los colaboradores de AFP Capital no ofrecerán ni entregarán, y tampoco solicitarán ni recibirán, beneficios de ninguna índole que conduzca a, o sugiera, un conflicto de intereses entre sus actividades personales y los de AFP Capital"*, es interrumpida la demandante por el juez a quo indicando: *"yo los invito a que puedan alcanzar algún tipo de acuerdo y que el abogado de la empresa formule algún ofrecimiento y se comunique inmediatamente con el gerente que corresponde, porque es bastante serio..."* *"yo soy juez penal y es bastante grave, bastante serio que se pueda indicar eso en una carta de aviso, ya que esto es un delito regulado para los funcionarios públicos, y esto al informarse a la Superintendencia de Pensiones es bastante serio, en cuanto a que eso, obviamente, lesiona derechos fundamentales. Entonces, yo invito al abogado que hagamos un receso y que puedan formular algún ofrecimiento con todos los incrementos que pueda establecer la ley en estas materias."*

Que, frente a la imposibilidad de efectuar una propuesta seria, se continúa la audiencia hasta la hora que había sido programada. Luego de diversas audiencias fallidas, se continúa el juicio el 27 de abril de 2023, oportunidad en la cual la demandada formula una recusación amistosa al juez para que este se inhabilite seguir conociendo de la causa por estimar que había formulado dictamen sobre cuestión pendiente al señalar: *"que la carta de despido era vulneratoria de derechos fundamentales y que la situación era grave, y que básicamente condenaría a mi representada con todos los recargos que ello implica"* (sic).

Agrega que, frente a tal petición la respuesta del a quo no se dejó esperar y fue del tenor siguiente: *"Vistos, oídos y considerando: Que el Tribunal considera que no ha emitido ningún dictamen (acerca del fondo de la materia controvertida) sino que las opiniones fueron vertidas dentro*



del llamado a bases de conciliación, y conforme a ello se rechaza la incidencia, sin costas conforme el artículo 144 del CPC”.

Que en contra de la negativa a la recusación amistosa se dedujo apelación la cual también fue rechazada, razón por la cual se recurrió de hecho ante el mismo tribunal, recurso que finalmente fue rechazado por esta Corte, por inadmisibile.

Continúa señalando que antes de terminar la audiencia de juicio de 27 de abril de 2023 el a quo señalo: “En caso de que el Tribunal de segunda instancia determine que este juez debe continuar adelante con la tramitación del caso y confirme la ausencia de inhabilidad, se fijará el pago de las costas en la suma de \$1.000.000, lo cual deberá ser consignado en su oportunidad en la cuenta corriente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial”

Finalmente sostiene que de los hechos descritos, resulta clara la vulneración a las normas del debido proceso, donde es palpable el prejuzgamiento efectuado por el juez en cuestión, el cual luego se materializa en una sentencia desmedida y abusiva, condenando a mi representada al pago de 11 remuneraciones por concepto de indemnización especial por tutela, daño moral (sin que se haya rendido prueba para tales efectos) y condenando a mi representada, además, a medidas reparatorias por conceptos idénticos a los solicitados por concepto de despido injustificado, aun cuando el juez estimó que la demanda fue mal planteada y se tuvo por desestimada la demanda subsidiaria de despido injustificado. Sostiene que bajo este escenario cualquier prueba, antecedente o alegación realizada en juicio por esta parte hubiera sido inútil, ya que es claro que el juez el día 4 de enero de 2023 ya había decidido como fallar, sin si quiera haber escuchado a la parte demandada.

En esta parte finaliza sosteniendo que su parte no tuvo posibilidad de defensa por enfrentarse a un juez cuyo dictamen se emitió sin escuchar a todas las partes contradictorias en el conflicto, debiendo acogerse el recurso de nulidad por esta causal invocada, debiendo invalidarse la sentencia por haberse vulnerado abiertamente la garantía del debido proceso.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XGLVXLLJXEK

SEGUNDO: Que, atendida la causal alegada, como primera cuestión, previo a la resolución de la misma, es necesario examinar a cerca del cumplimiento de los requisitos y formalidades que la hacen procedente, no pudiendo soslayar dicho examen. En efecto, tratándose el recurso de nulidad laboral, un medio de impugnación de carácter extraordinario y de derecho estricto, la formalización del mismo exige, de parte del recurrente, la prolijidad y exhaustividad que el mismo legislador se ha encargado de revelar. En efecto, tal recurso representa una vía impugnativa extraordinaria, de interpretación restrictiva, que debe ajustarse precisamente al estatuto que lo gobierna, por lo que su procedencia está limitada, en primer término, por la naturaleza de las resoluciones impugnables, en segundo lugar, por las causales que lo hacen procedente y que están expresamente establecidas en la ley; y finalmente, por las diversas exigencias, condiciones y formalidades que debe cumplir el libelo en que se materializa, en especial, la necesidad de claridad y precisión en su fundamentación y argumentación, de forma tal que debe ser compatible con la causal invocada, de contener peticiones concretas, todo lo cual está destinado a fijar el alcance de la competencia entregada al tribunal superior, el cual no puede acogerlo por motivos distintos, salvo la situación contemplada en el inciso final del artículo 479 del Código del Trabajo, y, al respecto, justamente por ello el inciso final del artículo 478 del mismo cuerpo legal impone al recurrente, si el recurso se fundare en distintas causales, la obligación de señalar si se invocan conjunta o subsidiariamente. Finalmente se impone, al recurrente, la carga de precisar de manera clara y pormenorizada, la forma en que los presuntos vicios que denuncia han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, a fin de cumplir con la exigencia de transcendencia exigida por la ley y que resulta propia a todo medio de impugnación que genera invalidación de la sentencia y/o del procedimiento, como también así si tal medio de impugnación ha sido preparado, cuando el vicio alegado se cometió durante la tramitación del procedimiento, al tenor de lo dispuesto en el artículo 478 inciso penúltimo del Código del Trabajo.



TERCERO: Que, tal cual lo reconoce el recurrente, lo reclamado es la falta al debido proceso, motivada, a su juicio, a las conductas que habría observado el juez de base durante la tramitación de la causal, al exceder el ejercicio de sus facultades en el llamado a conciliación y finalmente al no haber accedido a la solicitud de recusación amistosa fundada en haber emitido un pronunciamiento respecto de la cuestión debatida.

Que, atendido a los hechos imputados al juez de fondo, los que serían constitutivos de una falta de imparcialidad los que habría afectado el debido proceso, derecho a defensa del recurrente, se hace necesario e imprescindible acreditar y/o probar los hechos en que se funda la causal alegada. Sobre este punto, aparte de los dichos del recurrente en su libelo recursivo no se ha rendido prueba alguna, en esta instancia, de la forma prevista en el artículo 481 inciso 3 del Código del Trabajo, que expresa: *"No será admisible prueba alguna, salvo las necesarias para probar la causal de nulidad alegada"*, que permita formase la convicción, a estos sentenciadores, de la efectividad de los hechos constitutivos de la causal, para sí una vez tenidos como ciertos, pronunciarse si se encuentran dentro de la hipótesis del artículo 477 primera parte del Código del Trabajo.

Que, lo anterior es un antecedente relevante para que dicha causal no pueda prosperar.

CUARTO: Que, unido a lo anterior y tratándose de la falta de imparcialidad del juez a quo, como fundamente de la infracción al debido proceso, aparece con toda claridad que la misma no fue preparada, como lo mandata el artículo 478 inciso penúltimo. Por el contrario, cualquier vicio o acto o comportamiento que pudiera haber constituido una manifestación de parcialidad del juez a quo, quedó del todo convalidado por el actuar del propio recurrente operando una verdadera renuncia de ello.

En efecto, el mismo recurrente circunscribe los hechos que constituirían, a su juicio, una falta de imparcialidad las actuaciones observadas por el juez de base en la audiencia del 4 de enero de 2023. Que no obstante aquello, solo en la audiencia del 27 de abril de 2023 alegó la



recusación amistosa, el cual fue rechazado, así como la apelación y finalmente recurso de hecho. Que conforme a lo que reza el artículo 114 del código adjetivo civil *"La declaración de implicancia o de recusación cuando haya de fundarse en causa legal, deberá pedirse antes de toda gestión que atañe al fondo del negocio, o antes de que comience a actuar la persona contra quien se dirige, siempre que la causa alegada exista ya y sea conocida de la parte"*.

"Si la causa es posterior o no ha llegado a conocimiento de la parte, deberá proponerla tan pronto como tenga noticia de ella".

"No justificándose esta última circunstancia, será desechada la solicitud, a menos que se trate de una implicancia. En este caso, podrá el tribunal imponer a la parte que maliciosamente haya retardado el reclamo de la implicancia una multa que no exceda de un sueldo vital".

Por otro lado, conforme a lo que dispone el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil *"antes de pedir la recusación de un juez al tribunal que deba conocer del incidente, podrá el recusante ocurrir al mismo recusado, si funciona solo, o al tribunal de que forme parte, exponiéndole la causa en que la recusación se funda y pidiéndole la declare sin más trámite"*.

Rechazada esta solicitud, podrá deducirse la recusación ante el tribunal correspondiente".

Por su parte el artículo 204 del Código Orgánico de Tribunales dispone que *"De la recusación de un juez de letras conocerá la Corte de Apelaciones"*.

Conforme a este conjunto de disposiciones se desprende que la falta de imparcialidad de un juez debe ser alegada por el que cree ser afectado por ella, tan pronto tome conocimiento, bajo sanción de ser desechada y debe ser alegada ante la Corte Apelaciones respectiva. En el caso sub-iudice, el recurrente planteo fuera de plazo legal la inhabilidad de juez y vía recusación amistosa y frente a la negativa de ello no concurrió a la Corte de Apelación para formular, derechamente, recusación en contra del juez del grado. Todas estas actuaciones demuestran, a juicio de estos sentenciadores, una verdadera renuncia a dicho derecho, lo



que se conoce como convalidación de un supuesto vicio, todo lo cual le impide alegar igual vicio, ahora por la vía de la causal de nulidad laboral infracción de garantía al debido proceso, desde que con su actuar convalidó cualquier vicio de parcialidad, sin perjuicio que como ya se dijo precedentemente constituyó una falta de preparación del recurso, todo lo cual constituye otra razón para que la causal de nulidad no pueda prosperar y sea desechada.

QUINTO: Que a mayor abundamiento, estiman estos sentenciadores que los hechos alegados como constitutivos de una falta de imparcialidad que, a juicio del recurrente, afectaron su derecho al debido proceso, su derecho a defensa, carecen de la trascendencia que debe reunir todo vicio que pretende anular como único remedio para corregir el procedimiento, desde que al optar por elegir esta vía - recusación por falta de imparcialidad vía violación de garantía al debido proceso- para impugnar una resolución judicial, se estaría abriendo una puerta interminable para lograr obtener una sentencia favorable cuando por la vía normal le ha sido adversa, lo que no es la finalidad que busca la causal empleada.

Que, finalmente y yendo al fondo y sin perjuicio de que no consta a estos sentenciadores, como ya se dijo, la efectividad de los hechos en que se funda la causal, es de parecer de esta Corte que la actuación que observó el juez del grado no alcanzó para constituir una falta de imparcialidad, en los términos de ser capaz de afectar el derecho al debido proceso del recurrente.

Que así las cosas y por los razonamientos y fundamentos expuestos, la causal de nulidad basada en la falta de imparcialidad no puede prosperar y será rechazada.

SEXTO: Que, como primera causal subsidiaria la recurrente denunció la prevista en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, *"cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior"*.

Que, la referida causal la funda en que en base a los hechos que han sido acreditados, no se puede concluir que se



hayan vulnerado los derechos fundamentales de la actora, en específico, la honra y la integridad psíquica.

Expone que la calificación jurídica errada se produce porque el empleador, cumpliendo con el mandato legal, invocó hechos en la carta de despido y señaló la causal aplicada. Por tanto, el solo hecho de invocar hechos que no son acreditados en juicio, no puede considerarse una vulneración a la honra, porque el empleador se encuentra obligado por ley a invocarlos en forma clara y pormenorizada, es errado estimar que la no acreditación de los hechos, sean cuales sean, pueda constituir una infracción a la honra y la integridad psíquica, y esa es la errada calificación jurídica que efectuó el tribunal, ya que luego de leer los hechos asentados lo coherente hubiera sido declarar injustificado el despido, pero en ningún momento efectuar una ficción legal para estimar que se produjo una vulneración a la honra y a la integridad psíquica, cuando es el propio fallo que señala que nada de ellos se pudo acreditar al respecto. En resumen, sostiene que la errada calificación jurídica se produjo al considerar que las circunstancias de haberse visto privada la actora de ejercer sus funciones al ingresar al archivo de irregulares y que la investigación en sí misma haya sido deficiente.

Finaliza solicitando que se acoja dicha causal y se anule la sentencia dictando otra de remplazo que declare que el despido fue a lo más indebido o injustificado, pero jamás lesivo a los derechos fundamentales denunciados.

SÉPTIMO: Que, en relación a esta segunda causal alegada como primera subsidiaria, es prudente señalar, como ya se mencionó, que el presente recuso tiene la naturaleza de ser de derecho estricto, que supone, en el caso de la causal alegada, un reconocimiento de los hechos de la causa, tal como lo ha reconocido el propio recurrente en su libelo recursivo, de tal suerte que la calificación o ponderación de hechos dados por probados, es una facultad privativa del juez de base, salvo en los casos, en que aparezca de manifiesto, que la calificación dada a los hechos por probados, se aparte de forma clara, manifiesta, evidente y abusiva de una regulación dada por el legislador, lo cual, por cierto, no



ocurre, evidentemente, en el caso sub-lite, desde que a los hechos que se dieron por probados, de forma fundada, motivada y razonada, en base a premisas extraídas del material probatorio allegado a la causa, el a quo le dio la calificación, que conforme a aquellos, le correspondía efectuar, en el caso de marras que el despido resultó ser lesivo a los derechos fundamentales de la honra y la integridad psíquica, dando lugar a la denuncia por tutela, conforme lo explica, razona lata y pormenorizadamente, en el motivo décimo del fallo en revisión.

Sin perjuicio de lo anterior, tampoco señala el recurrente, con claridad y precisión, que exige la causal invocada, cuales hechos y de qué forma se incurrió en dicho error.

Claramente, a juicio de estos sentenciadores, lo alegado por el recurrente no es un error en la calificación jurídica, sino más bien alega un error en la valoración que efectuó el juez de base, desde que no pudo arribar que tales hechos lesionaron la honra y la integridad psíquica de la actora.

Que bajo estas premisas y argumentos la causal primera subsidiaria, será rechazada igualmente.

OCTAVO: Finalmente, el recurrente alega como segunda causal subsidiaria, la prevista en el artículo 477, segunda hipótesis del Código del Trabajo, esto es, cuando la *"sentencia se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo"*.

Lo anterior relacionado con las normas de los artículos 489 y 172 del Código del Trabajo.

Alega que la infracción al artículo 489 del Código del Trabajo se produjo por cuanto el juez de base dio lugar a la indemnización por aviso previo y la de años de servicio, como una medida reparatoria, fundándose en el artículo 495 del Código el Trabajo. Sostiene que el vicio es evidente por cuanto no fueron solicitadas y por cuanto dentro de las medidas reparatorias no se encuentran las referidas indemnizaciones.



Del mismo modo cuestiona el otorgamiento de la indemnización por daño moral, sosteniendo que esta es improcedente, ya que debió ser probado, puesto que no se presume y además por no estar dentro de las medidas reparativas, como lo afirma el juzgador de base.

En un segundo capítulo referente a la infracción al artículo 172 del Código del Trabajo sostiene que ello se configura por cuanto al ordenar el pago de las indemnizaciones a que fue condenada la demandada lo hace sin respetar el todo de 90 UF regulado por la norma referida, configurándose así la infracción denunciada.

Concluye solicitando que se acoja el recurso de nulidad por este capítulo, de forma subsidiaria, anulando la sentencia, dictando otra de remplazo que elimine toda indemnización a que fue condenada por concepto de medida de reparación y en todo caso que se respete el tope regulado en el artículo 172 del Código del Trabajo.

NOVENO: Que en lo que se refiere a esta causal intentada como segunda subsidiaria, correrá una mejor suerte que las anteriores. En efecto, del análisis de las normas de los artículos 489 y 495 del Código del Trabajo, se desprende claramente que, en caso de acogerse la acción de tutela, las indemnizaciones que son procedentes son las especiales de tutela -de 6 a 11 meses de sueldos- la indemnización de aviso previo, años de servicio, con el recargo respectivo, en su caso y la indemnización por daño moral, desde que esta última es plenamente compatible con la especial de tutela al provenir aquella -daño moral- de los perjuicios inmateriales causados con motivo de la vulneración de las garantías fundamentales, siendo en consecuencia compensatorio de aquellos. (Corte Suprema ROL 9.298-2019).

Que, en relación a la indemnización de perjuicios por daño moral, si la sentencia establece que el empleador conculcó uno de los derechos a que se refieren los incisos primero y segundo del artículo 485, provocándole una lesión de carácter extrapatrimonial, es del todo procedente que dicho daño sea resarcido, puesto que la reparación del daño moral es compatible con la indemnización tarifada predeterminada por la ley, ya que ésta, como lo ha afirmado



nuestro máximo tribunal, tiene carácter punitivo o sancionatorio, objetivo que es distinto a la del daño moral, que es compensatoria; de modo que el juez laboral está habilitado para otorgar dicha reparación en la sede resuelta. (Sentencia de la I. Corte de Apelaciones de la Serena ROL 263-2018).

Que, lo anterior, queda aún más corroborado por la circunstancia que es el propio artículo 495 del Código del Trabajo, al señalar los requisitos que debe cumplir la parte resolutive de la sentencia, dispone, en su número 3 *"La indicación concreta de las medidas a que se encuentra obligado el infractor dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos fundamentales, bajo el apercibimiento señalado en el inciso primero del artículo 492, incluidas las indemnizaciones que procedan"*, sin especificar qué tipo de tutela resarcitoria corresponde que se decrete, quedando facultado el tribunal para fijar aquella que proceda conforme al mérito de los antecedentes, quedando incluida aquí la correspondiente al daño moral.

De esta forma el argumento sostenido por la parte demandada en cuanto a la infracción de ley referida a la procedencia del daño moral será desestimado, máxime lo razonado y analizado detalladamente por el juez *a quo* en el motivo décimo del fallo, en especial en el número 15.

Que, conforme a lo que se viene razonando, estos sentenciadores estiman que como el empleador, Administradora de Fondos de Pensiones Capital S. A. infringió el contenido protector establecido en los incisos primero y segundo del artículo 485 del Código del Trabajo, con ocasión del despido, conforme al inciso tercero del artículo 489, se hace merecedor, no sólo, de la indemnización adicional, la que fue regulada, dentro de las facultades propias por el juez de base, en 11 meses de la última remuneración mensual, de carácter punitivo, sino también una indemnización de perjuicios por daño moral que persigue la reparación de los perjuicios morales ocasionados.

Que, la norma del artículo 495 no contempla dentro de las obligaciones a que puede ser condenada la demandada de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XGLVXLLJXEK

tutela las mismas indemnizaciones contempladas y reguladas en el artículo 489, a título de medida reparativa, desde que dentro de este concepto, a juicio de estos sentenciadores, no incluye el pago de estas indemnizaciones, sino otras como se dijo, desde que las de aviso previo, años de servicio y recargo, en su caso, están reguladas a propósito del despido, en la medida que se haya pedido de la forma que indica el artículo 489 del Código del Trabajo.

De esta manera, estima esta Corte que el juez de base ha incurrido en una infracción de ley -artículo 489- la cual influyó en lo resolutivo del fallo, por cuanto al incluir las indemnizaciones propias del despido, dentro del artículo 495, como medida reparativa, máxime cuando se resolvió rechazar la acción de despido por defecto en la forma de proposición, condenó a la demandada a pagar una suma superior a la que realmente le correspondía, de haber aplicado correctamente la norma del artículo 489 en relación al artículo 495, ambos del Código del Trabajo, motivo por el cual hace procedente el acogimiento parcial de la solicitud de invalidación y la dictación de sentencia de remplazo que acoja la exclusión de tales indemnizaciones de la forma como se dirá en lo resolutivo del fallo.

DÉCIMO: Finalmente, en relación a la segunda infracción, la del artículo 172 del Código del Trabajo, en cuanto se solicita aplicación del tope de 90 UF respecto a toda indemnización, estiman estos sentenciadores, que el juez de la instancia hizo una correcta aplicación respecto de la indemnización especial de la tutela sin incurrir en el vicio alegado, por cuanto dicha limitación sólo está regulada a propósito de las indemnizaciones consagradas en el título V - artículo 159 y siguientes, años de servicio, aviso previo-, mas no así respecto a la indemnización especial de la tutela, en la cual no se impuso tales topes, como sí lo hizo expresamente el legislador, a propósito de la indemnización referida, apareciendo ajustada a derecho la resolución del juez de base. Así por lo demás se desprende de lo dispuesto en el artículo 172 inciso 3: "Con todo, para los efectos de las indemnizaciones establecidas en este título, no se considerará una remuneración mensual superior a 90 unidades



de fomento del último día del mes anterior al pago, limitándose a dicho monto la base de cálculo.

Habiéndose excluido las indemnizaciones por años de servicio y aviso previo resulta innecesario pronunciarse acerca del tope de estas indemnizaciones.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 478 y siguientes del Código del Trabajo, se decide:

I.- Que se **ACOGE**, parcialmente, el recurso de nulidad intentado por doña María Lola Peña Ríos en contra de la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictada por don Diego Francisco Rubi Araya, Juez Letrado Destinado del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, en los autos RIT T-197-2022 y RUC 22-4-0433717-7, caratulados "Peña Ríos, María Lola con Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A", solo en cuanto a declarar nulo dicho fallo por la causal tercera, esto es, en tanto fundado en la causal del artículo 477, segunda hipótesis, del Código del Trabajo, invalidándose dicha sentencia sólo en aquella parte que dio lugar a las indemnizaciones por falta de aviso previo, años de servicio, dictándose a continuación, en conformidad a la ley, el respectivo fallo de reemplazo, sin nueva vista.

II.- Que el libelo antes individualizado queda rechazado en todo lo demás y, por ende, la sentencia no es nula, salvo en aquella parte previamente indicada.

III.- Que no se condena al pago de las costas.

Redacción del Abogado Integrante señor Gabriel Alfonso Gallardo Verdugo.

Regístrese en la forma que corresponda, notifíquese y devuélvase en su oportunidad vía interconexión.

Rol N°329-2023. Laboral.-



Felipe Andrés Pulgar Bravo
Ministro(P)
Corte de Apelaciones

Veintitrés de enero de dos mil veinticuatro
13:43 UTC-3



Pilar Eugenia Aravena Gómez
Fiscal
Corte de Apelaciones

Veintitrés de enero de dos mil veinticuatro
13:46 UTC-3



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XGLVXLLJXEK



Gabriel Alfonso Gallardo Verdugo

Abogado

Corte de Apelaciones

Veintitrés de enero de dos mil veinticuatro
13:46 UTC-3



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XGLVXLLJXEK

Pronunciado por la Sala Extraordinaria de la C.A. de La Serena integrada por Ministro Presidente Felipe Andres Pulgar B., Fiscal Judicial Pilar Eugenia Aravena G. y Abogado Integrante Gabriel Alfonso Gallardo V. La Serena, veintitres de enero de dos mil veinticuatro.

En La Serena, a veintitres de enero de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XGLVXLLJXEK

Peña Ríos, María Lola
Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A
Tutela- Despido Injustificado
Rol N° 329-2023 (RIT T-197-2022 del Juzgado de Letras del
Trabajo de la Serena).

La Serena, veintitrés de enero de dos mil veinticuatro.

SENTENCIA DE REMPLAZO

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión de nulidad que antecede, dictada con esta misma fecha y en conformidad a lo prescrito en el artículo 478 del Código del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce el fallo anulado, con las siguientes modificaciones:

a.- El motivo décimo, N°19 se elimina, pasando a ser los motivos "20, 21, 22, 23, 24 y 25" los nuevos "19, 20, 21, 22, 23 y 24", respectivamente.

b.- La resolutive B, letra c) y d), se eliminan, pasando a ser la resolutive B, letras e) y f) las nuevas c) y d), respectivamente.

Y teniendo en su lugar y además presente

PRIMERO: Que, en materia de tutela de derechos fundamentales, dispone el artículo 489 inciso 3 del Código del Trabajo, que *"En caso de acogerse la denuncia el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y la establecida en el artículo 163, con el correspondiente recargo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 168 y, adicionalmente, a una indemnización que fijará el juez de la causa, la que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración mensual"*.

SEGUNDO: Que, conforme a lo señalado precedentemente, el juez de base, en caso de acogerse la denuncia por tutela de derechos fundamentales, ordenará el pago de indemnización sustitutiva del aviso previo, la indemnización por años de servicio en caso que sea procedente, más el recargo de dicha indemnización en los porcentajes regulados en el artículo 168 letras a), b) o c) del Código del Trabajo, según



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TTEXXLJZPEK

correspondiere, más una indemnización especial que fluctúa entre 6 y 11 meses de remuneración, determinada, esta última, por el juez de la causa conforme al mérito de los antecedentes.

TERCERO: Que, del mismo modo, en materia de tutela laboral, la ley contempla, en el artículo 495 del Código del Trabajo, una norma adicional referida a las exigencias que debe cumplir la parte resolutive del fallo que acoge la acción, dentro de las cuales, en su numeral 3 indica el señalamiento de las denominadas medidas reparativas y dentro de ellas las demás indemnizaciones que procedan.

Que, conforme a dicha disposición, como se dijo en el fallo de nulidad, quedan incluidas otro tipo de reparaciones dinerarias, diversas a las reguladas en el artículo 489 inciso 3 del Código del Trabajo, dentro de las cuales, como igualmente se dijo, se encontraría el daño moral. Sin embargo, estiman estos sentenciadores, que no quedan incluidas, a título o como medidas reparativas, las indemnizaciones correspondientes a aviso previo, años de servicio y recargo legal, en su caso, desde que estas son consecuencia propia y directa de la declaración de un despido, sea indebido, incausado, injustificado o improcedente, y que además se encuentra reguladas en el inciso 3 del artículo 489. Que, a mayor abundamiento, dichas indemnizaciones resultan ser del todo improcedentes, desde que en el caso sub-iudice, la demanda por despido injustificado fue rechazada por el juez de base, conforme da cuenta el fallo, en su resolutivo A.

CUARTO: Que, por otra parte, no existe norma legal alguna que faculte al juez de base para condenar a la demandada, a título de otras medidas reparativas, a las indemnizaciones propias de un despido, en caso de acogerse la denuncia por tutela, como ya se mencionó.

QUINTO: Que, en razón de lo anterior y lo que se ha venido razonando, mal podría concluirse la procedencia de las indemnizaciones por aviso previo y años de servicio, como erradamente lo concluyó el juez a quo, muy por el contrario, son del todo improcedentes y en razón de ello así serán declaradas, rechazándose dicha pretensión.



Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 420, 446, 478, 489, 495 y demás pertinentes del Código del Trabajo y demás normas legales vigentes, se decide:

I.- Que se **ACOGA** la demanda de folio 1, por tutela de derechos fundamentales deducida por doña María Lola Peña Ríos en contra de Administradora de Fondo de Pensiones Capital S. A., y estimándose que, con ocasión del despido de que fue objeto, la demandada vulneró los derechos fundamentales de la honra y la integridad psíquica, se condena a la demandada al pago de las siguientes sumas de dinero, por los conceptos que se indican y las siguientes medidas reparatorias:

a) Tope de 11 remuneraciones sobre la base de \$6.447.882, lo que equivale a una indemnización de \$70.926.702 conforme a la indemnización tarifada del artículo 489 del Código del Trabajo.

b) Devolución descuento de la suma de \$1.500.000 de finiquito que le deberá ser reintegrado a la denunciante.

c) Indemnización por daño moral por la suma de \$10.000.000 (diez millones de pesos) como medida reparatoria del artículo 495 del Código del Trabajo.

d) El tribunal oficiará a la Superintendencia de AFP para que la denunciante María Lola Peña Ríos pueda ser reintegrada al registro de ejecutivos de ventas y eliminada del registro de ventas irregulares como medida reparatoria conforme al artículo 495 n°3 del Código del Trabajo.

II.- Cada parte pagará sus costas al no resultar completamente vencida la denunciada al rechazarse la demanda por despido injustificado.

III.- Que, las sumas ordenadas pagar, señaladas precedentemente, deberán solucionarse con los reajustes e intereses que establecen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.







Ejecutoriada que se encuentre la presente sentencia cúmplase con lo dispuesto en ella, dentro de quinto día. En caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional respectivo, y hágase devolución de los documentos acompañados por las partes, en su caso.



Redactada por el abogado integrante señor Gabriel Alfonso Gallardo Verdugo.-.

Regístrese en la forma que corresponda, notifíquese y devuélvase en su oportunidad vía interconexión.

Rol N°329-2023. Laboral.-

<div><div></div><div><div>Felipe Andrés Pulgar Bravo</div><div>Ministro(P)</div><div>Corte de Apelaciones</div><div>Veintitrés de enero de dos mil veinticuatro</div><div>13:56 UTC-3</div></div></div> <div></div>	<div><div></div><div><div>Pilar Eugenia Aravena Gómez</div><div>Fiscal</div><div>Corte de Apelaciones</div><div>Veintitrés de enero de dos mil veinticuatro</div><div>13:58 UTC-3</div></div></div> <div></div>
<div><div></div><div><div>Gabriel Alfonso Gallardo Verdugo</div><div>Abogado</div><div>Corte de Apelaciones</div><div>Veintitrés de enero de dos mil veinticuatro</div><div>14:01 UTC-3</div></div></div> <div></div>	



Pronunciado por la Sala Extraordinaria de la C.A. de La Serena integrada por Ministro Presidente Felipe Andres Pulgar B., Fiscal Judicial Pilar Eugenia Aravena G. y Abogado Integrante Gabriel Alfonso Gallardo V. La Serena, veintitres de enero de dos mil veinticuatro.

En La Serena, a veintitres de enero de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TTEXXLJZPEK